En apoyo de sus pretensiones, el demandante alega que:

- La aplicación retroactiva de la decisión impugnada viola los principios que rigen la repetición de lo indebido, y en particular el artículo 85 del Estatuto, así como los principios de confianza legítima y de buena administración.
- A efectos de aplicación del artículo 67 del Estatuto, la asignación de orfandad no constituye un complemento del mismo tipo que la asignación por hijos a cargo. Por lo tanto, no sólo el carácter irregular de los pagos efectuados por la administración hasta febrero de 2002 no resultaba evidente, sino que lo irregular, en realidad, es la deducción que establece la decisión impugnada.

Recurso interpuesto el 11 de octubre de 2002 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por David Meca-Medina e Igor Majcen

(Asunto T-313/02)

(2002/C 305/62)

(Lengua de procedimiento: francés)

En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 11 de octubre de 2002 un recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado por David Meca-Medina, con domicilio en Barcelona, e Igor Majcen, con domicilio en Liubliana (Eslovenia), representados por el Sr. Jean-Louis Dupont, abogado.

Los demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule la decisión de la Comisión notificada a los demandantes el 5 de agosto de 2002, por la que se desestima la denuncia presentada el 31 de mayo de 2001 contra el Comité Olímpico Internacional.

Motivos y principales alegaciones

Mediante la decisión impugnada, la Comisión desestimó la denuncia presentada por los demandantes, nadadores profesionales, contra determinadas prácticas y reglamentos del Comité Olímpico Internacional (COI) en materia de lucha contra el dopaje por ser contrarios al Derecho europeo de la competencia. Los demandantes se oponen en particular a que, en materia de detección de la sustancia nandrolona, el COI siga aplicando un límite cuya falta de pertinencia científica ha quedado demostrada en la actualidad.

Los demandantes sostienen que la Comisión cometió un error manifiesto de apreciación de hecho y de Derecho al considerar que, en materia de reglamentos antidopaje, el COI no es una empresa en el sentido de la jurisprudencia comunitaria. En opinión de los demandantes, es evidente que el COI no es asimilable a un organismo de servicio público en materia de seguridad social y que no ejerce prerrogativas de poder público. Además, tales reglamentos influyen en el comportamiento de todos los atletas que operan en el mercado de las prestaciones deportivas.

Por otra parte, los demandantes alegan que la Comisión cometió un error manifiesto de apreciación al estimar que, en el presente asunto, la limitación de la libertad de los atletas no constituye una restricción de la competencia en el sentido del artículo 81 CE por tratarse de una limitación inherente a la organización y al buen desarrollo de la competición deportiva. Las consideraciones efectuadas por la Comisión constituyen, en opinión de los demandantes, una aplicación manifiestamente errónea de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia en el apartado 97 de la sentencia Wouters⁽¹⁾, y, a su juicio, resulta evidente que los efectos restrictivos de las normas del COI consideradas no son inherentes al logro de los nobles objetivos de la lucha antidopaje. A juicio de éstos, corresponde a la Comisión (con arreglo al «criterio de inherencia» y/o al «criterio de proporcionalidad») declarar que una norma cuya falta de fundamento científico ha quedado acreditada no podía en ningún caso cumplir las exigencias derivadas de dichos criterios.

Por último, la apreciación de la Comisión es manifiestamente errónea en la medida en que niega todo efecto directo horizontal al artículo 49 CE. Los demandantes consideran que, dado que las normas del COI controvertidas no cumplen el «criterio de inherencia», ha de concluirse igualmente que dichas normas vulneran el artículo 49 CE.

⁽¹⁾ Sentencia de 19 de febrero de 2002 (C-309/99, Rec. p. I-1577).

Recurso interpuesto el 15 de octubre de 2002 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Marie-Claude Girardot

(Asunto T-316/02)

(2002/C 305/63)

(Lengua de procedimiento: francés)

En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 15 de octubre de 2002 un recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas

formulado por Marie-Claude Girardot, con domicilio en L'Haye les Roses (Francia), representada por Me. Eric Boigelot, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo.

La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule las decisiones del tribunal del concurso de 5 y 30 de julio de 2001 de no tomar en consideración la candidatura de la demandante para el concurso interno COM/R/502211/01 incluido en la convocatoria para la provisión de puestos de trabajo vacantes y de concursos internos conexos de 28 de mayo de 2001.
- Anule la decisión desestimatoria expresa de la reclamación de la demandante, que fue presentada el 29 de enero de 2002 y desestimada mediante decisión expresa de la que acusó recibo la demandante el 15 de julio de 2002.
- Condene en costas, en cualquier caso, a la parte demandada.

Motivos y principales alegaciones

La demandante entró al servicio de la Comisión el 1 de febrero de 1996, primero como experta nacional en comisión de servicios y después como agente temporal. Presentó su candidatura al concurso interno para el nombramiento como funcionario titular COM/R/502211/2001. Pues bien, fue informada de que el tribunal del concurso había comprobado que no tenía 5 años de antigüedad en el servicio como agente temporal el 1 de enero de 2001, por lo que su nombre no podía ser incluido en la lista de candidatos admitidos a las pruebas.

La demandante se opone a dicha exclusión. Alega que habría que tener en cuenta también el período durante el cual estuvo al servicio de la Comisión como experto nacional en comisión de servicios. Nada indica, *a priori* que un candidato a un

concurso interno que ha sido experto nacional en comisión de servicios antes de ser agente temporal no posea niveles de competencia al menos iguales, o incluso superiores, a los de los candidatos que prestan sus servicios en la institución como agentes temporales. La Comisión no puede demostrar, en consecuencia, que la exclusión de la participación de una candidata que ha sido experta nacional en comisión de servicios antes de ser agente temporal esté justificada en aras del interés del servicio.

En apoyo de su recurso, la demandante invoca asimismo:

- la infracción del artículo 27, párrafo primero, del Estatuto;
- la violación del principio general de igualdad de trato;
- la violación del principio general según el cual toda decisión administrativa debe basarse en motivos legalmente admisibles;
- la infracción del artículo 4, párrafo primero, y del artículo 29, párrafo primero, del Estatuto.

Archivo del asunto T-116/02 ⁽¹⁾

(2002/C 305/64)

(Lengua de procedimiento: francés)

Mediante auto de 10 de septiembre de 2002, el Presidente de la Sala Quinta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas ha decidido archivar el asunto T-116/02, Antonio Aresu contra Comisión de las Comunidades Europeas.

⁽¹⁾ DO C 144 de 15.6.2002.